

CONTESTACIÓN DEMANDA - REPARACIÓN DIRECTA

JERSON HAROL PENAGOS RODRIGEZ <jersonpenagos89@gmail.com>

Mar 18/10/2022 17:05

Para: Juzgado 01 Administrativo - Caqueta - Florencia <j01adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: silmur3@hotmail.com <silmur3@hotmail.com>;Notificación Judicial <notificacionjudicial@medilaser.com.co>

Doctora:

FLOR ANGELA SILVA FAJARDO

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA

Email: j01adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Florencia – Caquetá.

E.S.D.

Con el respeto acostumbrado y estando dentro del término legal, me permito allegar contestación de demanda al medio de control de Reparación Directa, instaurado por DANIEL TOVAR ALVAREZ Y OTROS en contra de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN y OTRO, adelantado bajo la Radicación No. 18001-33-33-001-2019-00671-00, por la presunta Falla en la Prestación del Servicio Médico, en hechos ocurridos el día 13 de junio de 2017.

Comendidamente,

[HC-DANIELA CASTRO ORTEGA.pdf](#)

JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ

Apoderado Judicial - ESE Hospital San Rafael



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

Florencia, 18 de Octubre de 2022

Doctora:

FLOR ANGELA SILVA FAJARDO

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA

Email: j01adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Florencia – Caquetá.

E.S.D.

REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL - REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE: DANIEL TOVAR ALVAREZ Y OTROS
DEMANDADO: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN Y OTRO
RADICADO: 18001-33-33-001-2019-00671-00

JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ, mayor de edad, con domicilio en el Municipio de El Doncello, Caquetá, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.506.434 de Florencia, Caquetá, y portador de la Tarjeta Profesional No. 226.452 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado Judicial del **HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETÁ** (según poder que me ha otorgado el doctor **MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.332.178 de Popayán, en calidad de Representante Legal de la ESE) conforme al poder adjunto, comedidamente le solicito al Despacho reconocerme personería para actuar.

Igualmente, en ejercicio del mencionado reconocimiento que me confiere facultades para ejercer la defensa, estando dentro del término de ley y de conformidad con el artículo 175 del CPACA modificado parcialmente por la Ley 2080 de 2.021, procedo a dar contestación a la demanda que ha dado origen al presente proceso, en los siguientes términos:

1. FRENTE A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS

Me opongo de manera rotunda frente a todas las pretensiones de la demanda, con fundamento en las razones de defensa que expondré en la presente contestación y el acápite de las excepciones, como consecuencia de lo anterior, solicito de manera respetuosa al honorable despacho cognoscente se sirva decretar la correspondiente condena en costas, a la parte que resulte desfavorable la sentencia.

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá
Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co
Celular: 3118406298



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ **ABOGADO ESPECIALISTA**

2. FRENTE A LOS HECHOS (me permito contestarlos en el mismo orden en que están confeccionados).

AL PRIMERO: No me consta de cómo está compuesta el núcleo familiar, ni su estado socioeconómico, por lo anterior será objeto de prueba.

AL TERCERO: No me consta, son situaciones ajenas a la entidad que represento.

AL CUARTO: No me consta, se atiene a lo que se encuentre consignado en la correspondiente historia clínica.

AL QUINTO: me atengo a lo que resulte probado, por cuanto no se tiene certeza del peso de la gestante, ni del feto, según la apreciación de la parte actora, por lo tanto será objeto de prueba en su momento procesal.

AL SEXTO: No me consta, lo anterior será objeto de prueba en su momento procesal.

AL SEPTIMO: me consta, conforme a las anotaciones realizadas en su historia clínica, en cuanto su ingreso por el servicio de urgencias y la atención pronta y oportuna prestada por el personal de la institución, en cuanto a lo que se debió de realizar, es una apreciación subjetiva de la parte actora, quien no es un profesional de la salud, por lo cual será objeto de debate en su momento probatorio.

AL OCTAVO: me consta en cuanto al traslado de la paciente del hospital san Rafael de san Vicente del Caguán, el cual es oportuno y con todos los parámetros de cuidado de la paciente, desconozco de la atención prestada en la entidad Medilaser de la ciudad de Florencia, Caquetá.

AL NOVENO: Es un hecho que no le consta a mi representada. Se tratan de hechos de terceros de los cuales mal podría referirse la entidad que represento. Sera la parte demandante quien deberá probar el hecho alegado.

AL DECIMO: No me consta, es una apreciación de la parte actora quien no es un profesional de la salud para emitir este tipo de conceptos o sugerencias, sin fundamento alguno.

AL UNDECIMO: Solamente es cierto la muerte del nasciturus, según se colige de su registro civil de defunción. Respecto de la causa de su fallecimiento es un hecho ajeno a la actuación desplegada por el personal del hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, quien actuó de manera diligente y según el protocolo médico para el caso en concreto, la apreciación de la parte actora carece de fundamento y será desvirtuada en su momento probatorio.

AL DUODECIMO: no me consta, es una apreciación subjetiva de la parte actora, quien no es un profesional de la salud para enunciar responsabilidad alguna a la institución que represento, en donde se le brindo un adecuado y diligente servicio de salud a la paciente.



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ

ABOGADO ESPECIALISTA

AL DECIMOTERCERO: No me consta, son situaciones de las cuales desconoce la institución a la cual represento.

AL DECIMOCUARTO: Cierto en cuanto a la cláusula de responsabilidad contenida en el artículo 90 constitucional; Frente a lo demás no es cierto la endilgación que se le realiza a mi representada, quien actuó conforme al protocolo médico y la lex artis, brindando un correcto y adecuado servicio a la paciente DANIELA ORTEGA.

AL DECIMO QUINTO: No es cierto, lo anterior es una apreciación subjetiva de la parte actora, con fines indemnizatorios, la parte demandante no aporta prueba de la responsabilidad ni de los perjuicios.

AL DECIMO SEXTO: Es cierto, la entidad que represento no ha indemnizado porque no le asiste responsabilidad por los hechos manifestados por la parte actora, así como tampoco existe condena en concreto en contra de la entidad Hospital San Rafael, que ordene indemnizar a la parte accionante dentro del presente medio de control de Reparación Directa.

AL DECIMO SEPTIMO: No es cierto, en el presente caso no se configura ninguno de los elementos estructurales de la responsabilidad, es una apreciación escueta de la parte actora en procura de obtener indemnización por los hechos relacionados. Por lo tanto, será la parte quien deberá demostrar el hecho alegado.

3. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA

A. De ley:

Art 1, 2, 4, 13, 29, 47, 48 y 90 de la constitución política de Colombia

Ley 100 de 1993

Ley 1437 del 2011

Ley 23 de 1981

Decreto 1760 de 1990

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, prevé la responsabilidad del Estado únicamente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que hayan sido causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Para que surja para la Entidad Pública la obligación de reparar un daño resulta necesario que la lesión pueda serle imputada jurídicamente.

Frente al alcance de la citada disposición Constitucional es claro que para poderle atribuir responsabilidad al HOSPITAL SAN RAFAEL, deben configurarse indiscutiblemente los tres elementos constitutivos de esta, al igual que establecer cuáles son los eximentes de responsabilidad a saber:

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá

Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co

Celular: 3118406298



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ **ABOGADO ESPECIALISTA**

A.- Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia. La falta o la falla que se trata no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la Administración.

B.- Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc. Con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.

C.- Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización.

Así las cosas y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, el actor tiene que representar en el juicio la existencia de unos daños que reúnan las siguientes cualidades: que sea cierto, particular y anormal y que recaiga sobre una situación de acto o de hecho, o que esté protegida jurídicamente. En cuanto al nexo de causalidad: También el actor debe demostrarlo con prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho el legislador infiera la causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del Juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el adecuado nexo de causalidad. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por sí mismo y/o b) indirecta, mediante indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado y el demandado para exonerarse podrá probar causa extraña: o por hechos exclusivos de la víctima o del tercero o por fuerza mayor.

En atención a la total oposición a las pretensiones invocadas en la presente demanda, me permito manifestar que la atención que se le brindó a la paciente DANIELA CASTRO ORTEGA, el día 17 de junio del 2017, se desarrolló en estricto cumplimiento de las obligaciones que le asistían a los galenos de la institución HOSPITAL SAN RAFAEL de San Vicente del Caguán, el cual fue adecuado, oportuno y pertinente al arte médico aplicable para el caso.

En lo relacionado con el régimen de responsabilidad aplicable, el honorable Consejo de Estado Colombiano, a través de un caudal de pronunciamientos jurisprudenciales ha sentado su postura, en cuanto la prestación del servicio médico es de carácter subjetiva, que el régimen bajo el cual se debe de estudiar la responsabilidad del estado es la de la falla probada del servicio, por lo anterior así indicado la alta corporación que:

“Para comprobar la configuración de una falla del servicio, será indispensable “que se demuestre que la atención médica no cumplió con [los] estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica” para que pueda declararse la responsabilidad extracontractual del Estado. (...) la falla en el servicio –objeto de censura– deberá estar dada por la negligencia e impericia de no agotar todas las previsiones que la lex artis sugiere a efectos de atemperar los males sufridos por los



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

pacientes y no el simple hecho de que el personal médico descierte en la ruta terapéutica para mitigar o superar la patología –a menos que sea abiertamente equivocado”¹

A su vez el honorable **CONSEJO DE ESTADO** ha estimado que, en los casos de responsabilidad médica, el régimen bajo el cual se encausa el proceso es bajo el de la falla probada, siendo una excepción la aplicación del régimen objetivo:

“La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril 2019, unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución de los casos sometidos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación. En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable, de cara a los hechos probados dentro del proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, o que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria⁹. No obstante que el modelo de responsabilidad extracontractual del Estado colombiano no privilegió un título de imputación, la posición de la Corporación en esta época se orienta en el sentido de que la responsabilidad médica, en casos como el presente, debe analizarse bajo el tamiz del régimen de la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre esta y el daño, sin perjuicio de que en los casos concretos el juez pueda, de acuerdo con las circunstancias, optar por un régimen de responsabilidad objetiva.”²

Reiterando que la responsabilidad por la prestación del servicio de salud es de naturaleza subjetiva, lo cual indica que el régimen aplicable, es el de falla probada del servicio, por lo cual no basta que quien alegue que existió una falencia o un defecto en la prestación del servicio

¹ sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 20315,

² CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A- consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO- Bogotá, D.C., treinta y uno de enero (31) de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 05001-23-31-000-2004- 04848-01(47975) <http://190.217.24.55:8080/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=doc&file=2126871>

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá

Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co

Celular: 3118406298



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

de salud, solo se limite a enunciarla, si no por el contrario debe probar en que radico la falla o la falencia, así como también debe indicar el daño y el nexo causal entre aquella y este.

Para que obre plenamente la cláusula de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la constitución, no solo basta la ocurrencia del daño, sino que este debe ser atribuible a la negligencia o impericia del personal médico o del centro asistencial, y de su omisión o acción conlleva a la producción de este (daño), el cual no debe soportar el administrado, el cual ya ha sido debatido en citada jurisprudencia, en los términos:

“La responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la *lex artis* y que esa inobservancia fue la causa eficiente del daño. Esa afirmación resulta relevante para aclarar que si bien de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el derecho a la reparación se fundamenta en la antijuridicidad del daño, no es suficiente verificar que la víctima o sus beneficiarios no estaban en el deber jurídico de soportarlo para que surja el derecho a la indemnización, se requiere que dicho daño sea imputable a la Administración, y sólo lo será cuando su intervención hubiera sido la causa eficiente del mismo”³.

Para el presente caso, la parte actora si bien es cierto demuestra la ocurrencia de un presunto daño, pues no logra acreditar en que consistió la falla en la prestación del servicio de salud o la incorrecta aplicación de la *lex artis* durante el periodo de gestación, hasta el momento de su desembarazo de la señora DANIELA CASTRO ORTEGA, para que se profiera condena en contra de mi prohijada, quien le brindo la atención y servicio medico acorde al estado de la paciente, con un actuar eficiente y acorde a su nivel de complejidad. Por lo anterior expongo las siguientes excepciones:

4. EXCEPCIONES DE MERITO

4.1. INEXISTENCIA DE IMPUTACION FACTICA O MATERIAL DEL DAÑO A LA ATENCION MÉDICA PRESTADA EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.

Encuentra esta excepción su asidero, en el artículo 90 de la constitución política de Colombia, que trae inmersa en su cuerpo la cláusula de responsabilidad, en los siguientes términos “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.”

Según la posición jurisprudencial que ha manejado el Consejo de Estado, los casos de falla médica son revisados actualmente bajo el régimen de la falla probada del servicio, en el cual

³ consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 19.192.



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ **ABOGADO ESPECIALISTA**

no solo debe demostrarse la existencia de un daño, sino también su imputabilidad a la entidad que se demanda. Una vez acreditado el daño antijurídico, es necesario verificar que el mismo es imputable a la entidad demandada, ya que no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia e imputabilidad de este, toda vez que se hace necesario que ello se encuentre soportado en el expediente.

Conforme a la anterior apreciación, se tiene que dentro de la pruebas obrantes dentro del expediente se presentó como prueba documental, la historia clínica de la paciente DANIELA CASTRO, y en ella se encuentran consignadas las actuaciones del personal médico y quienes asistieron a la paciente durante su embarazo, en el cual se evidencia que recibió una adecuada y eficiente prestación del servicio de salud, que el centro médico la presto acorde con su nivel, que estaba capacitado para realizarlo y que el fatal desenlace se produce por situaciones ajenas a la prestación del servicio médico, conforme a lo anterior no obra en contrario que pueda desvirtuar la falta de impericia o diligencia en la atención por parte del personal galeno, siendo de momento recordar que; la actuación del médico es de medios y no de resultados aunado a lo anterior es determinante que el hospital San Rafael de San Vicente del Caguán es un centro médico de primer nivel, por ello siempre se solicitó la remisión de la paciente, así como se le indico a la misma que debía acercarse a un centro médico de segundo o tercer nivel, tal y como está consignado en las diferentes anotaciones:

“PLAN remisión prioritaria G/O”⁴

En la misma fecha se le deja la anotación y las recomendaciones dadas a la paciente

“acudir de inmediato urgencias al iniciar trabajo de parto

Nota médica debido a considerar restante a término con alta morbimortalidad materna dado a polihidramnios + Macrosomía fetal se decide remitir de manera prioritaria urgente para lo cual se llama Asmet salud para lograr cita prioritaria refieren paciente ya valorada con ginecólogo doctor León el cual da orden médica se la nueva orden de remisión ahora.

Se explica a paciente riesgos y complicaciones entiende y acepta refiere estar E insiste con cita ginecología”

Posteriormente en atención general de fecha 09 de junio del 2017, la médico Luisa Fernanda Domínguez, le realiza la anotación e instrucciones a la paciente, las cuales hace caso omiso.

Plan: paciente en gestación a término se da salida de control prenatal se da recomendación de atención de parto en II / III nivel por macrosomía fetal y

⁴ folio 73- atención general de fecha 02 de junio del 2017



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

polihidramnios se citó con monitoria fetal hasta 20/06/2017 cuando cumpla 40 semanas acudir a urgencias si no ha iniciado trabajo de parto signos de alarma⁵ -

Es de anotar que el paciente faltó a su deber objetivo de cuidado y solicitar el cumplimiento de su E.P.S a la cual se encontraba vinculada para que le cumpliera con las órdenes de remisión ordenadas por los médicos del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, por cuanto no contaban con los especialistas para el seguimiento y atención del embarazo de la señora Daniela Castro, remisión que solo se realizó una vez se llegó el parto y por presentar dificultad en el mismo.

4.2. INEXISTENCIA DE FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO, ATRIBUIBLE A LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA, como causal exonerativa de responsabilidad.

Indica la parte demandante que la falla en la prestación del servicio médico, se debió a que a la paciente DANIELA CASTRO, se le debió practicar el procedimiento quirúrgico de la cesárea para prevenir la muerte del feto, pero este concepto lo realiza de manera deliberada sin fundamento alguno, contrario a lo anterior se debe tener en cuenta que a la paciente se le presto todo el apoyo y atención que ameritaba su estado de embarazo, obrante dentro de su historia clínica, obra con antelación a su parto una completa secuencia de seguimientos a través del programa de control y desarrollo, así como por parte de los galenos a través de la citas de control prenatal y la toma de exámenes de laboratorio para conocer del estado de embarazo y su evolución.

Es evidente el control estricto y diligente que se le realizo a la paciente durante su gestación, de ello reposan las diferente anotaciones en su historia clínica, en donde se le indica el manejo a la paciente, se le brinda educación, pese a no ser madre por primera vez, recibe toda la orientación médica y psicológica por parte de la institución Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, en donde se le indica que ante cualquier signo de alarma debe acudir de manera inmediata al hospital para asistirle en lo que se requiera.

Ahora pese a todo las recomendaciones de alerta brindadas a la paciente, cuando acude el día 13 de junio del 2017, se le realiza monitoreo y no es posible auscultar FETOCARDIA, en donde la misma paciente indica que lleva DOS (02) DIAS, con un fuerte dolor, contracciones intermitentes, irradiados a la región lumbar, y además refiere ausencia de movimientos fetales desde el día de ayer, sin acudir a urgencias, como se le había indicado, por lo anterior se ordena remitir a especialista, **lo que se realiza de manera inmediata por parte de la institución con destino a la clínica Medilaser de la ciudad de Florencia, de tercer nivel.**

Conforme a lo anterior se evidencia que no le asiste responsabilidad a la institución Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, en el daño antijurídico que se le pretende imputar, lo

⁵ Folio 74 – historia clínica, Daniela Castro,



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

que si se configura frente a la anterior premisa es la teoría de la **CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA**, al no asistir por urgencias, cuando empezó a tener las contracciones, para recibir ayuda de manera inmediata y tal vez hubiere logrado salvar la vida del nasciturus, situación a la cual se mostró renuente la señora DANIELA CASTRO a seguir las recomendaciones médicas, no solo en la fecha del fatal desenlace, sino en fechas anteriores como la del día 9 de junio del 2017, es decir ocho días antes de acudir a urgencias, como reposa en la anotación realizada por la médico cirujana Dra. LUISA FERNANDA DOMINGUEZ,⁶ en la cual la paciente no asistió a la cita programada, pese a la insistencia de la médico a través de las diferentes llamadas telefónicas realizadas, en este orden y en especial cuando se requiere que la paciente y ante su renuencia, lo cual es un hecho gravoso para el resultado que se pretende llevar a feliz término, pues se perdió tiempo valioso para preservar la vida del feto, teoría que se ha desarrollado en el tiempo y es acogida en las diferentes líneas jurisprudenciales:

“si la culpa de la víctima es la única causa exclusiva del daño, el fundamento del efecto exonerado total parece claro: la intervención de la víctima en su propio daño dirime todo posible nexos causal con el hecho que se imputa al demandado”⁷.

Queda claro que la culpa de la víctima debe ser considerada como un eximente de responsabilidad total, siempre que esta sea la única causa exclusiva y determinante del daño. La actuación de la víctima es la que, inequívocamente, podría conllevar como consecuencia ese determinado resultado dañoso.

Esta figura tiene como fundamento que, quien con su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, produjo exclusivamente su propio perjuicio, debe asumir las consecuencias de su actuar en su totalidad, para el caso en concreto se configura la culpa exclusiva de la víctima, porque la señora DANIELA CASTRO, pese a tener toda la información y la red de servicios de salud a su disposición, hizo caso omiso de asistir a los controles prenatales y más gravoso aun, que para la fecha cercana al parto, pese a presentar fuertes dolores y síntomas no acude de inmediato al hospital por urgencias, sino que al contrario deja transcurrir el tiempo y le resta importancia a la posibilidad de vida de su nasciturus, y solo acude cuando ya no siente que se le mueva en su vientre, como lo indico.

4.3. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL.

Invoco esta exceptiva por cuanto la parte actora pretende endilgarle responsabilidad del daño antijurídico a la institución Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, cuando en donde se causa el daño es la clínica Medilaser, en donde se practica la cirugía y se determina que el feto se encuentra sin vida, como se evidencia en el registro civil de defunción, por lo cual se

⁶ Folio 101, cuaderno principal de la demanda.

⁷ Domínguez Ávila, sobre la culpa de la víctima y la relación de causalidad en responsabilidad civil.



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

configura la falta de legitimación en la causa, como la define EL CONSEJO DE ESTADO⁸ en los siguientes términos:

"(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...)"

*Ahora bien, también ha sostenido la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir, de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones, sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no el procesal –; **si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho, sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto**(negrilla fuera de texto original).*

La anterior se configura al no ser la demandada Hospital San Rafael, quien practica la cirugía a la señora DANIELA CASTRO, pues su actuación se limita hasta la remisión de la paciente hasta la clínica Medilaser, para que sea atendida por un especialista y una vez llega al centro médico de II NIVEL, es intervenida quirúrgicamente, en donde se produce el fatal desenlace.

Sumado a todo lo comentado, en este caso, las pruebas aportadas al proceso son escasas para determinar la responsabilidad del Ente territorial, lo que nos muestra que no existiría ningún nexo de causalidad que demuestre tal carga, toda vez que; de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso que consagra el principio de la carga de la prueba, conforme al cual, "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen".

⁸ CONSEJO DE ESTADO. Subsección C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Radicación No. 22.032, Catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012)



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

4.4. LA INNOMINADA O GENERICA.

La anterior por mandato expreso del legislador, puede ser declarada de oficio las excepciones que el juzgador encuentre procedentes o probadas, lo anterior señor juez conforme al artículo 187 inciso 2 del CPACA.

5. PRUEBAS

Solicito se tengan en cuenta las siguientes:

A. DOCUMENTALES.

1. Copia íntegra de la historia clínica de la paciente DANIELA CASTRO ORTEGA, en donde reposan las atenciones brindadas por el personal médico y de salud del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.
2. Transcripción completa de la correspondiente Historia Clínica de las atenciones brindadas por el personal médico y de salud del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.

B. TESTIMONIALES

Ordénese la citación de las siguientes personas, todas ellas mayores de edad, quienes pueden ser encontradas en los lugares que se indican frente a sus respectivos nombres, pero que de todas maneras el suscrito apoderado de la demandada las presentará ante el Despacho de la Señora Juez, en la fecha que se fije para su práctica y para que declaren sobre los hechos que sirven de sustento fáctico a la presente demanda, a saber:

Los anteriores para que declaren sobre los hechos de la demanda y sobre las respuestas dadas en la contestación, así como de la atención brindada a la paciente DANIELA CASTRO y de lo que conocen de los hechos que aquí se debaten en el presente asunto.

1. **CAROL VIVIANA APONTE**, médico y cirujana que se puede ubicar en la calle 5 No. 3 – 38 del Barrio la Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán o a través del suscrito.
2. **LUISA FERNANDA DOMINGUEZ**, médico y cirujana que se puede ubicar en la calle 5 No. 3 – 38 del Barrio la Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán o a través del suscrito.



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

3. **ANGIE LASERNA MORENO**, médico general que se puede ubicar en la calle 5 No. 3 – 38 del Barrio la Consolata del Municipio de San Vicente del Caguán o a través del suscrito.

6. PETICION DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA.

Solicito de manera respetuosa se absuelva a la parte demandada de las pretensiones contenidas en la demanda, conforme a los argumentos de la contestación, la cual se hace en términos y en su defecto se condene a la parte demandante al pago de costas. Por lo anterior solicito declarar probadas las excepciones propuestas en el presente escrito.

7. ANEXOS

1. Los enunciados en el acápite de las pruebas.
2. Poder a mi conferido.
3. Cédula de Ciudadanía, Decreto de Nombramiento y Acta de Posesión del Representante Legal del Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.

8. NOTIFICACIONES

- El suscrito Apoderado y mi representada en la calle 5 # 3 – 38 del Barrio el centro del Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá o a los correos electrónicos: jersonpenagos89@gmail.com y info@hospitalsanrafael.gov.co.
- La Clínica Medilaser S.A, en la Calle 6 # 14A-55 Barrio Juan XXIII de Florencia y/o al correo electrónico: notificacionjudicial@medilaser.com.co.
- Los Actores y su apoderado, en la dirección indicada en la demanda.

De la Señora Juez, Atentamente,

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser la del abogado Jerson Harol Penagos Rodríguez, escrita sobre una línea horizontal.

JERSON HAROL PENAGOS RODRIGUEZ

C. C. No. 1.117.506.434 de Florencia, Caquetá

T. P. No. 226.452 del C. S de la J.



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

Doctora:

FLOR ANGELA SILVA FAJARDO

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA

Email: j01adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Florencia – Caquetá.

E.S.D.

RADICACION
DEMANDANTE
DEMANDADO

: 18001-33-33-001-2019-00671-00
: DANIEL TOVAR ALVAREZ Y OTROS
: E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL
CAGUÁN Y OTRO
: REPARACIÓN DIRECTA.

MEDIO DE CONTROL

MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ, con domicilio en el Municipio de San Vicente del Caguán, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre y representación de la ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, en mi calidad de Gerente según Decreto de nombramiento No.000279 del 20 de marzo del 2020 y Acta de Posesión No. 57 del 20 de marzo de 2020, respetuosamente por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor **JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ**, mayor de edad, con domicilio en el Municipio de El Doncello, Caquetá, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.506.434 de Florencia, Caquetá, y portador de la Tarjeta Profesional No. 226.452 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de la ESE Hospital San Rafael, tramite y lleve hasta su terminación el proceso de la referencia.

En ejercicio del poder conferido, mi apoderado queda facultado para conciliar, recibir, transigir, conciliar previa autorización del Comité de Conciliación, asistir a las audiencias, solicitar aplazamientos, sustituir, renunciar, revocar, reasumir, designar abogado suplente, contestar demanda, interponer recursos, presentar alegatos, solicitar pruebas, notificarse personalmente del Auto de Mandamiento de Pago y todas las providencias, proponer Excepciones (previas y de mérito), solicitar Levantamiento de Medidas Cautelares y en general ejecutar todos los actos procesales a que hubiere lugar para el cabal cumplimiento del presente mandato.

Sírvase Honorable Jueza, reconocerle personería, en los términos y para los fines aquí señalados.

Atentamente,

MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ

C.C. No. 76.332.178 de Popayán

Acepto,

JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ

C.C. No. 1.117.506.434 de Florencia, Caquetá.

T.P. 226.452 del C.S.J

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá

Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co

Celular: 3118406298



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



13546498

En la ciudad de San Vicente Del Caguán, Departamento de Caquetá, República de Colombia, el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Única del Círculo de San Vicente Del Caguán, compareció: MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 76332178, presentó el documento dirigido a juez primero administrativo del circuito de florencia y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

----- Firma autógrafa -----



60mvdny9erm3
18/10/2022 - 16:18:00



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



ANGELA ROCIO BARBOSA CARDENAS



Notario Único del Círculo de San Vicente Del Caguán, Departamento de Caquetá

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 60mvdny9erm3

DECRETO No. 000279
(20 de marzo de 2020)

El Gobernador del Departamento del Caquetá, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1797 de Julio 13 de 2016, el decreto 1427 de septiembre 1 ° de 2016, la Resolución del DAFP 680 de septiembre 2 de 2016, y el Decreto 785 de 2005

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a lo Establecido en la Ley 1797 de 2016 en su artículo 20 dispuso:
"Artículo 20. Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la Republica, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, sólo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por destitución o por orden judicial. Parágrafo transitorio. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos. Los procesos de concurso que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes continuarán hasta su culminación y el nombramiento 41' 1 1 del Gerente o Director recaerá en el integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la terna, el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso

DECRETO No. 000279
(20 de marzo de 2020)

del presente artículo. Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la respectiva Entidad Territorial o el Presidente de la República procederá al nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente artículo.”

2. Que el decreto 1427 de 2016 del 1 de septiembre de 2016 ***“Por medio del cual se reglamenta el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y se sustituyen las secciones 5 y 6 del Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”***

ARTÍCULO 2.5.3.8.5.1. Evaluación de competencias. Corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes como autoridades nominadoras del orden nacional, departamental y municipal, respectivamente, evaluar, a través de pruebas escritas, las competencias señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para ocupar el empleo de director o gerente de las Empresas Sociales del Estado.

ARTÍCULO 2.5.3.8.5.3. Evaluación de las competencias para ocupar el empleo de director o gerente de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. Las competencias del aspirante o aspirantes a ocupar el cargo de director o gerente de las Empresas Sociales del Estado del orden departamental, distrital o municipal, señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, serán evaluadas por el gobernador o el alcalde, de lo cual se dejará evidencia.

3. Que, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, mediante Resolución No. 680 de septiembre 2 de 2016, señala las competencias que se deben demostrar para ocupar el empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado.
4. Que el decreto 785 de 2005 a su tenor reza” Director de Hospital y Gerente de Empresa Social del Estado de primer nivel de atención. Para el desempeño del cargo de Gerente de una Empresa Social del Estado o de Director de Institución Prestadora de Servicios de Salud, del primer nivel de atención, se exigirán los siguientes requisitos, establecidos de acuerdo con la categorización de los departamentos y municipios regulada por la Ley 617 de 2000 y demás normas que la modifiquen o adicionen. 22.3.3 Para las categorías tercera, cuarta, quinta y sexta se exigirá como requisitos, título profesional en el área de la salud y experiencia profesional de un (1) año, en el sector salud.

DECRETO No. 000279
(20 de marzo de 2020)

5. Que el Gobernador del Caquetá, mediante memorando 000032, delego a la Dra. LILIBET GALVAN MOSHEYOFF (Secretaria de Salud Departamental) y a la Dra. MARIA CIELO SERRANO PALACIO (Jefe de Oficina de Recursos Humanos y Bienestar social) para que adelante, el reclutamiento de hojas de vida, la verificación de requisitos y prueba de competencia a las hojas de vida seleccionadas.
6. Que el Dr. MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ identificado con la cedula de ciudadanía número 76.332.178 de Popayán, cumple con el perfil estipulado en el decreto 785 de 2005 y las competencias estipuladas en la Resolución 680 de septiembre 2 de 2016 del DAFP, para desempeñar el cargo de Gerente de la Empresa Social del Estado SAN RAFAEL.

Conforme a lo anterior y siendo competente para ello,

DECRETA:

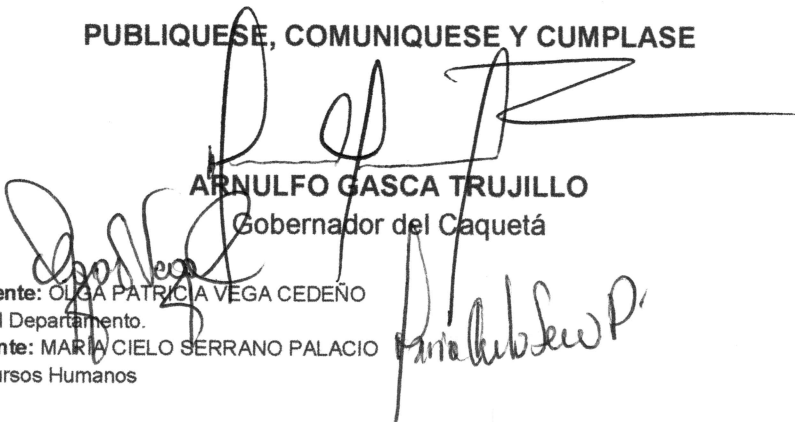
ARTICULO PRIMERO: NÓMBRESE, al Dr. Dr. MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ identificado con la cedula de ciudadanía número 76.332.178 de Popayán, como Gerente de la ESE SAN RAFAEL, durante el periodo institucional comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2024.

ARTICULO SEGUNDO: ENVIESE copia del presente Decreto a la ESE SAN RAFAEL y a la Secretaria de Salud Departamental.

ARTICULO TERCERO: COMUNIQUESE, este decreto por escrito, y si acepta, proceder a realizar la posesión del cargo con efectos fiscales a partir del primero (01) de abril del 2020.

ARTICULO CUARTO: El presente decreto RIGE a partir de la fecha de expedición.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



ARNULFO GASCA TRUJILLO
Gobernador del Caquetá

Aprobó Jurídicamente: OLGA PATRICIA VEGA CEDENO
Asesora Jurídica del Departamento.

Aprobó técnicamente: MARIA CIELO SERRANO PALACIO
Jefe de oficina Recursos Humanos

Nit. 800091594-4
DG/12.1

ACTA DE POSESIÓN NÚMERO: 57

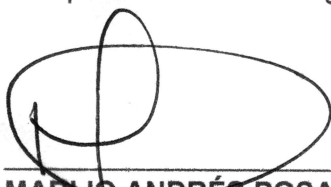
FECHA: 20 de marzo de 2020

En la ciudad de Florencia Caquetá, se presentó al Despacho del señor Gobernador del Departamento del Caquetá, el señor **MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ**, Identificado con la cédula de ciudadanía No.76.332.178 expedida en Popayán, con el fin de tomar posesión en nombramiento con Carácter Ordinario del cargo de Gerente de la E.S.E. **HOSPITAL SAN RAFAEL**, nombrado para el período comprendido entre el 01 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2024, mediante Decreto N°000279 del 20 de marzo de 2020, emanado del Despacho del señor Gobernador del Caquetá, con una asignación básica mensual de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS (\$5.947.000.) MCTE.

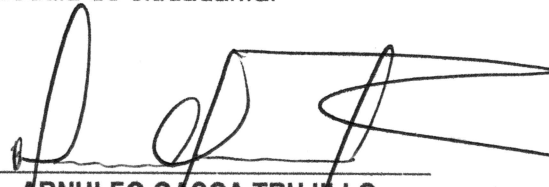
Prestó juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política.

Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

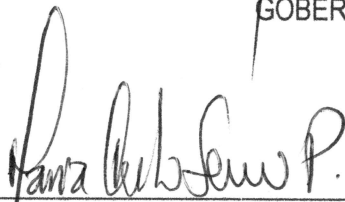
En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 49 el Decreto 1950 de 1973, para esta posesión solo se exige la presentación de la cédula de ciudadanía.



MARLIO ANDRÉS POSADA MUÑOZ
POSESIONADO



ARNULFO GASCA TRUJILLO
GOBERNADOR DEL CAQUETÁ



MARIA CIELO SERRANO PALACIO
JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR SOCIAL

Inés D

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.332.178

POSADA MUÑOZ

APELLIDOS

MARLIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUN-1979

PUERTO RICO
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

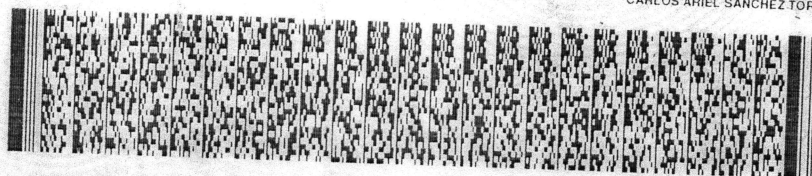
1.83
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-JUL-1997 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4400900-00163007-M-0076332178-20090716

0013527030A 1

8090102894